

Una visión de la pobreza desde la perspectiva de género

Shahra Razavi¹

Introducción

Después de más de un decenio de preocupaciones en torno a la estabilización y el ajuste, hacia comienzos de los años 90, las principales instituciones responsables de las políticas manifestaron un renovado interés en los problemas de la pobreza en el mundo. Estas preocupaciones encontraron una expresión más amplia en una serie de cumbres globales a comienzos de este decenio y señalaron, como mínimo, un cambio en el discurso (si no en la práctica) sobre el desarrollo. En la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social se expresaron algunos de los desafíos más importantes a la manera en que se está estructurando el sistema económico mundial, desafíos que han sido útiles para estimular a numerosos actores del desarrollo a renovar o ampliar su compromiso con el desarrollo social y con los objetivos de la Cumbre de erradicación de la pobreza, a saber, generación de empleo, integración social e igualdad de género. La Plataforma de Acción de Beijing despertó un renovado interés por los derechos de las mujeres como derechos humanos y a las importantes interrelaciones entre éstos y la erradicación de la pobreza. Una de las respuestas de las políticas ha sido el “Nuevo Programa contra la Pobreza”² de los organismos multilaterales de desarrollo, que define “el crecimiento intensivo en mano de obra” como su principio fundamental. Otra respuesta es aplicar el enfoque de la exclusión social, ya presente en los debates sobre las políticas sociales en Francia y Europa, al pensamiento sobre el desarrollo. ¿Cómo han encontrado los temas de género una plataforma en este nuevo programa?

Es evidente que la diferencia con los años 70, por ejemplo, cuando la prioridad de las políticas era la erradicación de la pobreza, reside en una visión, actualmente más amplia, de los temas de género. Esto es el resultado de una presión internacional y nacional creciente desde el Decenio de las Naciones Unidas para las Mujeres (1976-1985). Se han creado nuevas estructuras en numerosas organizaciones no gubernamentales, organismos de ayuda e instituciones del Estado con el objetivo de incorporar los diversos intereses de las mujeres en el proceso de elaboración de las políticas. A través de una serie de conferencias mundiales, las coaliciones de grupos de mujeres y ONG también han situado las preocupaciones de las mujeres en el programa de las políticas y, en algunos casos, incluso han cambiado la manera de entender ciertos temas clave del desarrollo social.

¹Shahra Razavi es directora de proyectos en el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación Social (UNRISD), Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10, Suiza. Email: razavi@unrisd.org. Actualmente, dirige el proyecto de investigación del Instituto sobre diversos países en el ámbito del Género, la Pobreza y el Bienestar.¹ Sus publicaciones más recientes versan sobre la dimensión de género del cambio institucional y de la pobreza.

A pesar de estos elementos visibles, existe cierta aprensión por la manera en que los análisis y las políticas contra la pobreza abordaban el tema de las mujeres y sus necesidades en los años 90, y preocupación porque la subordinación de género, que es un tema de la equidad, se está introduciendo en un programa para el aumento de los servicios de bienestar social. La preocupación por la incidencia de la pobreza entre los hombres y las mujeres ha superado en importancia a una pregunta mucho más crucial, a saber, cómo (a través de qué tipo de mecanismos sociales e institucionales) los hombres y las mujeres caen en la pobreza y permanecen en ella.

En un plano, la relación entre la desventaja de género y la pobreza parece ser bastante clara, como en la tendencia a ver a las mujeres, o a los hogares dirigidos por mujeres, como los “vulnerables”, o como los “más pobres entre los pobres”. Otro enfoque, cuyo tono es más instrumental, es el esquema de “ganar-ganar”, donde invertir en las mujeres, y especialmente en su educación, es considerado un medio eficaz para satisfacer los objetivos de desarrollo, como el aumento del bienestar social, la disminución de la pobreza y de la fecundidad. Los vínculos entre género y pobreza también han sido captados a través de la desagregación de género en resultados de bienestar, como la mortalidad y la nutrición infantil, que ha servido para poner de relieve las grandes desventajas de las mujeres.

Aunque todos estos argumentos proporcionen una perspectiva de la relación entre género y pobreza y tengan cierta validez empírica (en diferentes grados y en diferentes contextos), existe la tendencia a invocarlos de manera sumamente generalizada. Las generalizaciones tienden a reemplazar a los análisis rigurosos y específicos sobre cómo la pobreza se crea y se reproduce. El análisis de género de la pobreza también requiere explicar cómo el género diferencia los mecanismos sociales que conducen a la pobreza. Se trata de una cuestión importante, especialmente desde el punto de vista de las políticas. Sin embargo, ha recibido escasa atención en los últimos debates.

Este artículo reflexionará sobre dos tipos de temas. Empezaremos poniendo de relieve algunos de los obstáculos más persistentes para la medición y análisis de las diferencias de género en la pobreza. Se trata de consideraciones importantes, no sólo desde un punto de vista académico, sino también en lo que concierne al dominio de las iniciativas públicas, que se está volviendo cada vez más un fenómeno “basado en el conocimiento” (Sen, 1999). Posteriormente, abordamos algunas ideas sobre las políticas, sosteniendo que las mujeres pobres se relacionan de una manera algo diferente (de los hombres pobres) con los mercados laborales (y con los acuerdos de propiedad de la tierra, aunque no tocaremos éstos aquí). Si las políticas contra la pobreza han de mostrarse receptivas a las necesidades de las mujeres pobres, estas diferencias deben reflejarse

en el diseño y la ejecución de las políticas.

1. ¿Medir la desventaja de género?

Hay una nota paradójica en la investigación sobre la pobreza. Los conceptos de pobreza se han vuelto cada vez más sofisticados y multidimensionales en los años recientes, y abarcan importantes aspectos de las privaciones humanas, la desnutrición y la incapacidad de participar en decisiones estratégicas que afectan a nuestras vidas. La riqueza de los conceptos, no obstante, ha ido de la mano con la pobreza de los métodos y los datos. Esto suscita diversos problemas, especialmente en el análisis de género de la pobreza.

Al hablar de estos defectos, no pretendemos negar la importancia de las medidas. Las medidas son, al fin y al cabo, una preocupación fundamental del dominio de las políticas y reflejan una preocupación por el cálculo de costo-beneficio, de reivindicaciones que compiten por recursos escasos (Kabeer, 1999). Sin embargo, también existen limitaciones inherentes a lo que pueden proporcionar los enfoques cuantitativos. Este punto ha sido sucintamente captado en el Informe sobre la situación social mundial, que señala que “los indicadores sociales y económicos pueden proporcionar sólo miradas parciales e incompletas de realidades complejas y, a veces, contradictorias que determinan y conforman la calidad de vida de los individuos y las sociedades” (Naciones Unidas, 1993: 117). Estas miradas dicen muy poco sobre cómo (a través de qué mecanismos sociales e institucionales) los diferentes grupos sociales llegan a disfrutar de o ser privados de valiosas competencias. Por lo tanto, es necesario utilizar los indicadores junto con otro tipo de información y de análisis.

Los estudios convencionales sobre los hogares

Conviene señalar que, incluso aunque algunos documentos de las políticas afirmen la calidad multidimensional de la pobreza, se otorga prioridad a una definición de ingresos y/o consumo, y a una estimación cuantitativa del porcentaje de las personas que viven en la pobreza. Esto sucede, por ejemplo, en muchos de las Evaluaciones sobre la Pobreza que el Banco Mundial ha realizado recientemente. Al mismo tiempo, algunos de los enfoques sobre los procesos de la pobreza que emergen de la investigación cualitativa y “participativa” han sido marginados o están ausentes del análisis (Lockwood y Whitehead, 1999). Esto es una opción metodológica importante y tiene dos implicaciones.

En primer lugar, suma al análisis de la pobreza en una dependencia de los datos sobre los gastos que arrojan los estudios sobre los hogares, que, además de ser estrechos, suelen ser no fiables y no comparables. Como es bien sabido, en muchos países en desarrollo, los estudios sobre los

presupuestos de los hogares tienden a ser ejercicios aislados (no repetidos) que los inhabilita como mecanismos para hacer un seguimiento de la pobreza. Hay poca consistencia en cómo se establece el umbral de la pobreza, incluso para un mismo país. Esta inconsistencia anula, de hecho, el propósito de recopilar datos cuantitativos, puesto que uno de los motivos para utilizar dichos datos es precisamente que son comparables a lo largo del tiempo y en diferentes contextos.

Sin embargo, es más significativo que la dependencia de los datos sobre los gastos de los hogares tienen profundas implicaciones a la hora de ver cómo se analizan los temas del género. Medir la pobreza a partir de los datos sobre los gastos de los hogares ignora, de hecho, las inquietudes de larga data de las feministas acerca de la distribución en el interior de los hogares. Es muy raro encontrar estudios estándar que se embarquen en un análisis cuantitativo de la pobreza en el interior de los hogares. El ingreso per cápita y las medidas equivalentes sobre los adultos suponen la existencia de una distribución equitativa de los recursos en el interior de los hogares. Las sofisticadas técnicas econométricas utilizadas por algunos economistas para calcular la distribución de los recursos dentro de los hogares también demuestran ser insuficientes para la tarea; resulta difícil conseguir que estos conjuntos de datos contesten a preguntas para las que no están originalmente diseñados (Hart, 1995). En otras palabras, si los estudios sobre los hogares han de convertirse en instrumentos útiles para hacer un seguimiento de las diferencias de género en la pobreza, se deben incluir específicamente los temas de la distribución dentro de los hogares en el diseño del cuestionario.

Sin embargo, las estructuras administrativas y gubernamentales responsables de los ejercicios de recopilación de datos manifiestan una reticencia persistente a sondear el panorama en el interior de los hogares. Esto resulta sorprendente, dado el amplio conjunto de pruebas y argumentos que se han utilizado para referirse a este tema a lo largo de los dos últimos decenios, y que han sacudido, efectivamente, los fundamentos del enfoque económico convencional. Sin embargo, hay pocos estudios a nivel nacional que intenten recopilar datos en un nivel más desagregado.

La dependencia de los datos sobre los gastos de los hogares también significa que una de las maneras más fáciles para hacer visible el género es dividir los hogares entre los que están dirigidos por hombres y los que están dirigidos por mujeres, dado que las características de los jefes de los hogares (su género, edad, etc.) están invariablemente recogidas en estos estudios y constituyen una base útil para seleccionar los datos.

La tendencia a establecer una equivalencia entre la condición femenina de los jefes de hogar y la pobreza es, no obstante, problemática. La categoría de hogares rotulados “dirigidos por mujeres” es heterogénea. Incluye unidades de mujeres que viven solas, hogares de mujeres asalariadas

solas con jóvenes dependientes, hogares en que las mujeres asalariadas reciben remesas importantes de los hombres ausentes, etc. Algunas de estas condiciones pueden constituir lo que se han considerado razonablemente factores de riesgo de la pobreza, como hogares con niños mantenidos por mujeres solas (Folbre, 1990), mientras que otras no. Los hogares dirigidos por mujeres que obtienen remesas de los hombres ausentes, por ejemplo, normalmente son los que se encuentran en mejores condiciones. Al agrupar estas diferentes categorías de hogares generados por distintos procesos sociales (por ejemplo, migraciones, viudedad, divorcio) y construir un simple dualismo entre hogares dirigidos por hombres y hogares dirigidos por mujeres, es imposible interpretar las pruebas de manera significativa.

Los indicadores sociales

Una de las respuestas más positivas a las carencias conceptuales del enfoque convencional ha consistido en mirar más directamente a lo que las personas pueden hacer o ser, es decir, indicadores de la calidad física de vida (Morris, 1979) o de su funcionamiento (Sen, 1985). Puesto que estos “seres” y “haceres” son directamente mensurables en los individuos, las desigualdades de género también pueden hacerse más fácilmente visibles (PNUD, 1995). Por lo tanto, este marco ha inspirado un conjunto amplio de investigaciones feministas sobre los resultados del bienestar, documentando incidencias significativas y a veces alarmantes de las desventajas femeninas. Utilizando las estadísticas sobre distribución de sexos de los censos nacionales de población, diversos estudios han descubierto una incidencia generalizada de mortalidad infantil femenina (es decir, por encima de lo que sería un nivel “normal”) y, más recientemente, con la difusión de las técnicas de amniocentesis, la proporción de sexos en el nacimiento también indica que hay abortos selectivos de fetos femeninos. Estos esquemas son especialmente relevantes en el norte y en el noroeste de la India, así como en algunas partes del este de Asia. Ahí donde las normas culturales de preferencia por los hijos varones sigue siendo fuerte, en condiciones de disminución de la fecundidad, los padres intentan cada vez más manipular la composición sexual de su descendencia para asegurar el nacimiento de al menos un hijo varón.

Sin embargo, las pruebas sobre las desventajas de las mujeres en los primeros años de supervivencia no implican un esquema consistente de un sesgo antifemenino en el consumo de alimentos ni en la condición nutricional, como suele suponerse. Incluso en el norte y en el noroeste de la India, donde las pruebas sobre la discriminación de las mujeres jóvenes en términos de supervivencia son más consistentes, los hallazgos de los estudios nutricionales demuestran con frecuencia que la condición de las mujeres adultas es mejor que la de sus contrapartes masculinas (Harriss, 1990). Diversos analistas han advertido contra la tendencia a suponer que las desventajas de la mujer son universales, transculturales y ahistóricas.

Además, varias cuestiones metodológicas difíciles acechan tras las comparaciones aparentemente claras del bienestar masculino y femenino. El hecho de que los cuerpos femeninos y masculinos sean diferentes en forma y función suscita muchas cuestiones difíciles y no resueltas. Un aspecto problemático es el de la morbilidad, donde una proporción significativa de las condiciones que provocan la morbilidad son específicas en función del sexo y ponen a prueba las comparaciones sencillas de masculino/femenino (los problemas de salud reproductora son el ejemplo más flagrante). Otras enfermedades pueden ser específicas en función del sexo debido a predisposiciones genéticas, como la artritis reumatoide en las mujeres. Se pueden suscitar cuestiones similares acerca de los datos sobre la esperanza de vida. Si bien es engañoso concluir, basándose en el aumento general de la esperanza de vida de las mujeres, que se ha producido una mejoría en la salud femenina en edades más jóvenes, especialmente en la edad reproductora, puede ser igualmente engañoso atribuir las desventajas masculinas sólo a factores biológicos. Quizá la desventaja de los hombres en esperanza de vida indica que, además de las desventajas biológicas, también hay procesos sociales que perjudican la salud y la longevidad de los hombres (Jackson y Palmer-Jones, 1999).

Otro aspecto polémico es el seguimiento en cuestiones de nutrición, donde pueden formularse comparaciones significativas entre las categorías nutricionales de hombres y mujeres una vez que las "normas" y "límites" han sido ajustados para la diferencia de géneros. Éste es un proceso plagado de dificultades. Como demostró recientemente Harriss-White (1997), las conclusiones de los estudios realizados que utilizan los mismos conjuntos de datos pueden diferir dependiendo de los supuestos hechos sobre las normas y los límites, así como en el uso de criterios marcados por el género o no. Además, algunos criterios de consumo nutricional y de crecimiento antropométrico pueden contener sesgos profundamente arraigados contra las mujeres.

El objetivo de suscitar estos temas aquí es poner de relieve las polémicas metodológicas (y la arbitrariedad) cuando se formulan comparaciones de bienestar entre hombres y mujeres (temas que tienden a ser soslayados cuando se formulan comparaciones globales). En un esquema más amplio, estos problemas técnicos son sólo la punta del iceberg. Como han sostenido en repetidas ocasiones los que están familiarizados con este campo, los problemas de los datos relacionados con la fiabilidad y la comparabilidad son tan debilitantes en el ámbito de los indicadores sociales como lo son en el caso de los datos económicos. Muy pocos países en desarrollo, por ejemplo, tienen sistemas de registro globales y estadísticas vitales fiables a partir de las cuales se puedan obtener datos demográficos (India tal vez sea una excepción). Incluso para un indicador aparentemente claro como la alfabetización, existen pocos cálculos actualizados: para 19 de los 145 países (incluyendo los países desarrollados) no hay datos sobre la alfabetización de los adultos desde 1970, y para 41 países los datos se refieren a un año del decenio 1970-1979 (Srinivasan, 1994).

Los problemas metodológicos y las dificultades de interpretación señaladas más arriba se vuelven especialmente difíciles cuando nos desplazamos de los logros básicos, como la longevidad y la educación, a los aspectos difíciles del poder y la capacidad de acción. En años recientes, los temas del fortalecimiento de la comunidad y la autonomía han penetrado en los debates sobre la pobreza a través de diferentes canales. El marco de competencia de Amartya Sen, en particular, abarca tanto el funcionamiento básico, a saber, la longevidad y la nutrición adecuada, como competencias complejas, tales la libertad (a la que se adjudica un valor intrínseco). Al mismo tiempo, pero desde una perspectiva diferente, ciertos aspectos de los discursos de las políticas han visto en el fortalecimiento de la condición de la mujer un medio efectivo para disminuir la pobreza o para conseguir objetivos como la disminución de la fecundidad. En este caso, el valor del fortalecimiento de la condición de la mujer tiende a ser un instrumento eficaz, y el objetivo ha consistido en definir el carácter de la asociación entre los “grados de autonomía” que se les permite a las mujeres en diferentes contextos y ciertos resultados demográficos, económicos o sociales deseables. De aquí la búsqueda de indicadores fácilmente cuantificables de ese fortalecimiento.

Un concepto tan amplio del bienestar es especialmente útil desde una perspectiva de género, puesto que la desventaja femenina no siempre asume la forma de mal funcionamiento básico. Por ejemplo, la desventaja femenina en la supervivencia y la nutrición infantil no parecen tan generalizadas en el África subsahariana como en el sur de Asia. No obstante, las desventajas de género asumen otras características en la primera región, como la carga de trabajo muy superior de las mujeres o el dominio de los hombres en la toma de decisiones privadas y públicas.

Los indicadores utilizados para medir el fortalecimiento de la mujer varían sustancialmente: la movilidad de las mujeres en la esfera pública, su participación en los acontecimientos públicos, la incidencia de la violencia masculina, etc. Sin embargo, uno de los indicadores que aparece con más frecuencia en los esfuerzos de medición es la capacidad de toma de decisiones. Las medidas de la toma de decisiones suelen basarse en respuesta a preguntas a las mujeres sobre su papel en ámbitos específicos de la toma de decisiones, como la compra de la comida, la educación de los niños o el uso de servicios de planificación familiar. Un reciente estudio de los intentos para medir el fortalecimiento de la mujer a través de la técnica de las entrevistas (Kabeer, 1999) llegó a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, no todas las decisiones son igualmente persuasivas como indicadores del fortalecimiento de las mujeres. Las decisiones en relación con la compra de alimentos y otros pequeños artículos del consumo del hogar, por ejemplo, parecen situarse en el ámbito femenino de la toma de decisiones en muchas culturas y nos dice muy poco acerca del “fortalecimiento”,

que es, por definición, un proceso de cambio por el cual aquellos que han visto negada su capacidad de tomar decisiones adquieren dicha capacidad.

En segundo lugar, no todas las decisiones tienen el mismo peso. Algunas son opciones vitales estratégicas (casarse o no casarse y con quién hacerlo), mientras que otras son opciones de segundo orden (qué alimentos comprar).

Finalmente, las perspectivas estadísticas sobre la toma de decisiones en los hogares puede proporcionar una breve mirada de los procesos de la toma de decisiones, pero dice muy poco sobre las sutiles negociaciones que se producen entre hombres y mujeres en sus vidas privadas. Por consiguiente, es posible que subestimen las formas informales de la capacidad de toma de decisiones que las mujeres suelen ejercer. Esto es particularmente cierto en culturas donde las mujeres optan por formas informales de poder que mantienen intacta la imagen pública y el “honor” del responsable tradicional de las decisiones, pero que, no obstante, aumentan la influencia de las mujeres “en los pasillos” en la toma de decisiones.

En resumen, podemos formular unas cuantas afirmaciones. En primer lugar, si los indicadores convencionales de la pobreza han de proporcionar información útil para el análisis de género de la pobreza, los estudios sobre los hogares deben incluir cuestiones que sondeen la distribución de los recursos dentro de los hogares. Sin embargo, incluso los datos limitados disponibles pueden ser utilizados más acertadamente, en el caso de los hogares dirigidos por mujeres, donde, por ejemplo, se puede decir mucho más sobre la relación entre los hogares dirigidos por las mujeres y la pobreza mediante análisis posteriores e, incluso, mediante una simple desagregación de esta categoría de hogares. Finalmente, es importante recordar que los indicadores tienen ciertas limitaciones intrínsecas: proporcionan una instantánea de la pobreza como un “resultado” o estado, pero dicen muy poco sobre los procesos que producen aquel estado. Esto es especialmente cierto en el caso del estudio sobre los hogares. Es difícil establecer una relación entre la medida de la pobreza en términos de umbrales de la pobreza y sus causas en términos de procesos de empobrecimiento, y, por lo tanto, dar lugar a una explicación útil para las estrategias de lucha contra la pobreza. Por consiguiente, las evaluaciones de la pobreza también deben incluir otros tipos de “datos” de una gama mucho más amplia de estudios, con el fin de desplazar el análisis de los individuos y los hogares indiferenciados a través de niveles micro, medio y macro con conceptualizaciones apropiadas de las relaciones entre estos diferentes niveles y énfasis en las relaciones sociales y económicas. El género y su relación con la pobreza sólo se puede entender en relación con estos procesos relacionales (Lockwood y Whitehead, 1999).

2. Algunos comentarios sobre las políticas

Paradójicamente, la defensa del género adquirió fuerza en los años 80, cuando los programas de las políticas estaban dominados por la fe en los mercados y por una oposición a que el Estado interviniera para establecer equidad. Los informes de las políticas institucionales en diversos contextos documentan la resistencia que los profesionales encontraron en su lucha por llevar sus preocupaciones a organizaciones que no tenían en cuenta consideraciones de equidad. Otro problema para la promoción del programa sobre el género ha sido el entorno económico deprimido en el que se han encontrado muchos países en desarrollo. Cuando se pone el acento en la estabilización, los gobiernos están menos dispuestos y, de hecho, son menos capaces de acomodar las demandas para unas políticas redistributivas de género que implican comprometer nuevos recursos.

Las mujeres, la economía del cuidado y el capital humano

Los movimientos de mujeres han enfatizado repetidamente la necesidad de reconocer que las mujeres se encuentran en la encrucijada entre actividades “productivas” y el cuidado de seres humanos (la economía del cuidado). La subvención del cuidado de los niños y las instalaciones para el cuidado de los ancianos, los programas de salud pública, transporte público y agua potable y electricidad ayudan a las mujeres a satisfacer sus responsabilidades duales. Como ha demostrado convincentemente la literatura sobre el impacto del género en los ajustes estructurales, cuando los recursos del Estado no son canalizados a estos servicios, las mujeres deben trabajar más para compensar la carencia. En teoría, el trabajo de las mujeres en la economía del cuidado es esencial para la actividad económica y, por lo tanto, debería comportar derechos económicos. Sin embargo, atraer recursos cuando hay muchos asuntos que compiten y presionan a los presupuestos es un desafío de primera categoría para los movimientos de mujeres en todo el mundo. ¿Se ha demostrado una mayor disponibilidad para reconocer los beneficios más amplios de estos servicios sociales como el resultado de los compromisos contraídos en las recientes conferencias mundiales? ¿Y han tomado medidas los países para financiarlos? Éstas son algunas de las preguntas que muchos observadores se hacen en la etapa previa al “Copenhague Plus 5”.

Hay algunos signos positivos. La nueva ortodoxia sobre “el capital humano”, especialmente la educación, se refleja operativamente en el hecho de que el Banco Mundial ha dejado de poner el énfasis en la recuperación de los costos en la salud y la educación en los años 80 para defender, en los años 90, la eliminación de las tarifas que el usuario debe pagar en educación y salud, al menos para los habitantes rurales y en el nivel primario. En las Evaluaciones de la Pobreza se ha declarado que la educación está íntimamente relacionada con la productividad agrícola y, por lo tanto, también relacionada con las vías para escapar de la pobreza (Lockwood y Whitehead, 1999). Pero, como muchos han sostenido, aunque el énfasis puesto en la educación es bien

acogido, no es suficiente para abordar muchas de las causas estructurales de la pobreza. Las pruebas sobre la relación entre educación y pobreza son, a menudo, débiles y están abiertas a interpretaciones de signo opuesto. El Banco Mundial sostiene que la educación disminuye la pobreza porque conduce al crecimiento agrícola. Pero una explicación más convincente de la relación entre educación e ingresos parece ser que los hogares más ricos invierten en la educación de sus hijos porque pueden pagar los costos directos e indirectos de la escolarización y, a la vez, ser capaces de invertir en actividades agrícolas y ajenas a la granja que producen beneficios más altos (Lockwood y Whitehead, 1999).

En lo que concierne a la educación de las mujeres, los llamamientos de las políticas para invertir en la educación femenina (debido a sus altos beneficios) ha arrojado escasa luz sobre cómo las desigualdades de género subyacen a los resultados educativos, o cómo la educación de las mujeres puede alterar la reproducción de las desigualdades de género a través de los mercados laborales, por ejemplo. Como sostiene el reciente Informe de la Comisión sobre la Condición de las Mujeres, las iniciativas para crear un entorno capacitador para la educación de las mujeres tendrá menos impacto en términos de igualdad de género si no hay un compromiso paralelo para abordar la discriminación en el empleo (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1999).

Además, es necesario ampliar el concepto de capital humano con el fin de reconocer que los recursos de capital humano disponibles dentro del mercado se desarrollan, en parte, a través del cuidado y la inversión que se lleva a cabo en el sector de los hogares. Como ha sostenido Jean Gardiner (1998) recientemente, hay importantes argumentos para conceptualizar la actividad en el hogar como una inversión en capital humano. Como en cualquier otra forma de formación y adquisición de competencias, a través de la experiencia de la maternidad, las mujeres adquieren ciertas capacidades que contribuyen a un rendimiento exitoso en el lugar de trabajo. Pero esta forma de capital humano es rara vez reconocida explícitamente o valorada en el lugar de trabajo.

Las percepciones de las habilidades y capacidades, aunque estén socialmente construidas en función del género, tienen un impacto real en cómo funcionan los mercados laborales, por ejemplo, en la catalogación, selección y definición de salarios (ibid). El hecho de que la relación de las mujeres con el mercado laboral formal sea más intermitente que la de los hombres, y que cambien a otras formas de trabajo que son más compatibles con sus responsabilidades reproductoras durante ciertos períodos de sus vidas, también significa que es necesario encontrar mejores maneras de canalizar sus experiencias laborales alternativas y sus competencias. Éstos son algunos de los temas críticos que las organizaciones laborales que trabajan en el género deberían adoptar y priorizar.

El trabajo: ¿El activo más abundante de los pobres?

Los problemas laborales, especialmente en los mercados laborales que abarcan relaciones laborales entre y dentro de los hogares, han sido en los años recientes un importante tema de la discusión de la política económica rural de África y, en particular, del análisis de género de la agricultura africana. Se ha demostrado en repetidas ocasiones que, además de las consideraciones técnicas que limitan la subsistencia y la producción comercial de los hogares (el crédito, la ampliación), la falta de tiempo para trabajar la tierra con técnicas intensivas en mano de obra es un cuello de botella crítico. De hecho, en muchas partes del África subsahariana la utilidad de los derechos de la tierra está limitada por el alcance de los derechos laborales, y especialmente para las mujeres en el sector rural, la dificultad de mandar sobre el trabajo de sus superiores sociales significa que jamás pueden montar las grandes partidas de intercambio de trabajo que son tan importantes para los hombres del campo (Whitehead, 1984).

El tema de los límites en el trabajo de las mujeres en el África rural subsahariana es especialmente pertinente a la luz del consenso actual de las políticas sobre la pobreza, que sostiene tajantemente que el crecimiento intensivo en mano de obra favorece a los pobres porque el trabajo “es el activo más abundante de los pobres”. Este dogma de política tan especial ha llevado a algunos analistas a criticar, a un nivel muy general, las variedades de alta producción ahorradoras de mano de obra y las tecnologías de plantación de cultivos o de eliminación de malezas porque, para ellos, “ahorrar” mano de obra equivale a mano de obra “desempleada” (Lipton y Maxwell, 1992). Como han sostenido acertadamente los críticos, descartar las tecnologías que ahorran en mano de obra de una manera general como ésta es insostenible, puesto que ha ocurrido con frecuencia que las modalidades de ahorro de mano de obra han sido populares entre las mujeres granjeras para disminuir los trabajos pesados, y entre las mujeres asalariadas para estimular el crecimiento en los mercados laborales (Jackson, 1996). Si las mujeres (y los hombres), pequeños propietarios intentan reducir la intensidad del esfuerzo que invierten en su trabajo, no parece razonable negarles la opción de hacerlo a través de la adopción de tecnologías como las variedades que ahorran mano de obra.

Este tipo de obsesión de las políticas con extraer trabajo de los pobres, que está siendo validada a través de la Nueva Agenda contra la Pobreza, tiene que verse con preocupación, puesto que quizá no proporcione un escape de la pobreza; en algunos contextos y para algunos grupos puede, de hecho, socavar su bienestar físico (Jackson y Palmer Jones, 1999). Si las mujeres en especial tienden a mantener el bienestar físico evitando trabajos pesados, las políticas de lucha contra la pobreza deben considerar más cuidadosamente cómo puede afectar a la capacidad de las mujeres para evitar dichos trabajos. En un nivel más general, esto subraya la tensión entre los empleos que potencian la capacidad y los trabajos pesados, que genera pobreza a través del

proceso laboral, una tensión que fue sucintamente captada en el concepto de los trabajadores pobres.

El otro problema de este nuevo énfasis en el crecimiento intensivo en mano de obra es que no logra cuestionar el marco de políticas más amplio, que se supone, es inherentemente benigno. Sería un signo de miopía que, por ejemplo, las mujeres tuviesen que cambiar sus recursos (trabajo, tierra) por la producción de productos agrícolas de exportación sin formular más preguntas sobre qué tipo de oportunidades de mercado estarían abiertas para ellas, o cómo esta intensa integración al mercado afectaría la seguridad de la alimentación del hogar. En estos documentos de las políticas se presta escasa atención a los riesgos de la seguridad alimentaria (a nivel doméstico y nacional), que puede entrañar el hecho de depender de la exportación de productos agrícolas, ni se manifiesta ningún reconocimiento de los riesgos de precios a largo plazo si muchos países llevan a cabo estrategias de exportación de productos agrícolas simultáneamente. Ésta es la “falacia de composición” fatal que caracterizó las normativas de las políticas agrícolas bajo los programas de ajuste estructural tradicionales, y que continúa haciéndolo bajo el nombre de “Nueva Agenda contra la Pobreza”.

¿Qué sucede con el ingreso de las mujeres en el sector manufacturero intensivo en mano de obra? Un argumento que suelen esgrimir los defensores neoclásicos es que la industrialización para la sustitución de importaciones proporcionaba trabajos a una “aristocracia laboral” masculina, que generalmente excluía a las mujeres, mientras que los tipos de industrias que se amplían como respuesta a las oportunidades de los mercados extranjeros en un régimen de comercio abierto dependen en gran medida del uso de la fuerza laboral femenina. También se ha sostenido que, a la larga, el comercio aumentará los ingresos y salarios agregados en los países en desarrollo, y disminuirá la brecha de género en los salarios.

La dicotomía de sustitución de importaciones/fomento de las exportaciones es algo engañosa. La mayor parte de las economías industrializadas con éxito del este de Asia practicaban ambas políticas sistemática y simultáneamente. Incluso en el sudeste asiático, donde se sostiene que no ha habido una política industrial explícita, el gobierno de Tailandia probablemente se ha acercado a la estrategia japonesa y coreana de vincular una protección efectiva con el fomento de las exportaciones (Jomo et al., 1997). Por lo tanto, desde un punto de vista de las políticas, es importante no ver estas dos opciones como mutuamente excluyentes.

A pesar de esta importante matización, hay ciertas pruebas que sugieren que la promoción de las exportaciones y las políticas de liberalización del comercio, cuando son exitosas, han conducido a la feminización de la fuerza laboral. Sin embargo, el punto crucial es que el fenómeno del crecimiento liderado por las mujeres y por las exportaciones ha sido geográficamente desigual, y

sumamente volátil (Pearson, 1998). Incluso en Asia y en América Latina, el epicentro de este género de manufacturas, las empresas orientadas a la exportación e intensivas en mano de obra femenina han consolidado un asidero sólo en algunos países, mientras que los complejos factores políticos y económicos han impedido su emergencia en la mayoría de los países del África subsahariana y de Oriente Medio.

Además, las razones para la feminización son sumamente diversas. En algunos contextos (como en el México de los años 80), muchas mujeres han ingresado en el mundo del trabajo asalariado bajo duras condiciones, caracterizadas por un desempleo masculino creciente, un descenso de los salarios reales y recortes en los gastos sociales. Sin embargo, en otros países, por ejemplo en Bangladesh, la fuerza laboral en la nueva industria del vestido no es en ningún sentido un grupo homogéneo, conducido al trabajo en las factorías solamente por imperativos de supervivencia. Más bien, está compuesto de diferentes grupos de mujeres que han entrado a trabajar en las fábricas como respuesta a las diferentes necesidades e incentivos (Kabeer, 1995: 8).

Los estudios de micronivel ponen de relieve las posibilidades que el ingreso en los mercados laborales urbanos ha abierto para algunos grupos de mujeres en ciertos contextos, permitiéndoles renegociar los términos de sus relaciones domésticas y, en algunos casos, abandonar relaciones insatisfactorias o no entablarlas. Esto no pretende negar el hecho de que la mayor capacidad de maniobra en el hogar puede verse aparejada de diferentes controles patriarcales en el marco de la factoría, que, como sostenía un estudio del trabajo industrial de mujeres en Java, mantiene a las empleadas de las factorías “relativamente conformes”, con bajos salarios y, en gran medida, desprotegidas en empleos industriales que suelen ser peligrosos (Wolf, 1992: 254). Hay pruebas que demuestran los peligros para la salud, tanto físicos como mentales, que implica el trabajo en estas industrias. Esto se debe, a menudo, al uso de sustancias cancerígenas, largas jornadas laborales y, además, al carácter repetitivo y rápido del trabajo, que deja a las jóvenes trabajadoras prematuramente “quemadas” o “desgastadas” en el proceso laboral.

Los debates sobre el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo asalariado han suscitado muchas preguntas metodológicas difíciles. Una de éstas es la tensión entre criterios objetivos (competencias, salarios, temas de la salud) y temas subjetivos (las percepciones que tienen las mujeres de su propio trabajo) para evaluar las implicaciones de aquella forma de trabajo en la erradicación de la pobreza y para temas más amplios de discriminación y subordinación. Aunque se necesitan claramente referencias para ciertos criterios objetivos de bienestar con el fin de distanciarse de la insistencia utilitaria en tomar preferencias subjetivas como el único criterio para formular juicios acerca de los valores y el bienestar, también existe la necesidad de que las percepciones y valores de las mujeres encuentren un espacio en estas discusiones, aunque no fuera más que porque nos permiten entender mejor las opciones que toman las mujeres. En un

nivel más práctico, aunque la mejora de las condiciones laborales sigue siendo un tema importante del programa, en los países en desarrollo con exceso de mano de obra el número de trabajos creados puede, comprensiblemente, tener prioridad. Por lo tanto, es importante evitar estrategias que impongan una compensación de cantidad por calidad. Como tal, puede ser útil analizar las políticas sociales con una amplia base y las medidas redistributivas que aseguren un mejor nivel de vida para los trabajadores sin poner en peligro sus empleos.

Traducido del inglés

Notas

1. El proyecto UNRISD sobre "Género, Pobreza y Bienestar ha sido generosamente financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (Sida).
2. El 'Nuevo Programa contra la Pobreza' se refiere al programa de las políticas orientadas al tema de la pobreza, definido en el Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1990.
3. Esta sección está inspirada en Razavi (1999)

Referencias

BANCO MUNDIAL. 1990. Informe sobre el desarrollo mundial, 1990. Nueva York: Oxford University Press.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1999. Marco para futuras acciones e iniciativas que se podrían abordar durante la Sesión especial de la Asamblea General, titulado, "Las mujeres en el 2000: Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI", 15-19 de marzo 1999, Naciones Unidas: Nueva York.

FOLBRE, N., 1990. Mothers on their Own: Policy issues for Developing Countries. Nueva York: Population Council and International Centre for Research on Women.

GARDINER, J., 1998. "Beyond human capital: households in the macroeconomy." *New Political Economy* 3 (2): 209-221.

HARRISS, B., 1990. "The Intra-family distribution of hunger in South Asia", En: J. Drèze y A. Sen (eds) *The Political Economy of Hunger: Volume I. Entitlement and Well-being*, pp. 351-424, Oxford: Clarendon Press.

HARRISS-WHITE, B., 1997. "Gender bias in intrahousehold nutrition in South India: unpacking households and the policy process", in L. Haddad, J. Hoddinot, and H. Alderman (eds) *Intrahousehold Resource Allocation in Developing Countries: Models, Methods and Policy*, pp. 194-212, Londres y Baltimore: International Food Policy Research Institute y The Johns Hopkins University Press.

HART, G., 1995. "Gender and household dynamics: recent theories and their implications", En: M.

Quibria (ed) Understanding Economic Process, pp. 39-74, Lanham: University Press of America.

JACKSON, C., 1996. "Rescuing gender from the poverty trap". World Development 24 (3): 489-504.

JACKSON, C.; R. PALMER-JONES, 1999. "Rethinking gendered poverty and work." Development and Change (de próxima publicación).

JOMO, K.S.; C.Y. CHUNG, B.C. FOLK, I. ul-HAQUE, P. PHONGPAICHIT, B. SIMATUPANG y M. TATEISHI, 1997. Southeast Asia's Misunderstood Miracle. Boulder: Westview Press.

KABEER, N., 1995. Necessary, Sufficient or Irrelevant? Women, Wages and Intra-Household Power Relations in Urban Bangladesh. Documento de trabajo, N°. 25, Brighton: Institute of Development Studies.

KABEER, N., 1999. "Resources, agency, achievement: reflections on the measurement of women's empowerment." Development and Change, (de próxima publicación).

LIPTON, M. y S. MAXWELL, 1992. The New Poverty Agenda: An Overview. Documento de discusión N°. 306, Brighton: Institute of Development Studies.

LOCKWOOD, M. y A. WHITEHEAD, 1999. Gender in the World Bank's Poverty Assessments: Six Case Studies from Sub-Saharan Africa. UNRISD Documento de discusión, (de próxima publicación).

MORRIS, M.D., 1979. Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index. Oxford: Pergamon Press.

NACIONES UNIDAS, 1993. Informe sobre la situación social en el mundo, 1993. Nueva York: Naciones Unidas.

PEARSON, R., 1998. "'Nimble fingers' revisited: Reflections on women and Third World industrialization in the late twentieth century", En: C. Jackson y R. Pearson (eds.), Feminist Visions of Development, Londres and Nueva York: Routledge.

PNUD, 1995. Informe sobre desarrollo humano 1995. Nueva York: Oxford University Press.

RAZAVI, S., 1999. "Editor's Introduction: Gendered Poverty and Well-being" Development and

Change, (de próxima publicación).

SEN, A.K., 1985. *Commodities and Capabilities*. Amsterdam: Elsevier Science Publishers.

SEN, G., 1999. "Engendering Poverty Alleviation: Challenges and Opportunities" *Development and Change*, (de próxima publicación).

SRINIVASAN, T.N., 1994. "Human development: a new paradigm or reinvention of the wheel?." *The American Economic Review* 84 (2): 238-243.

WHITEHEAD, A., 1984. "Men and women, kinship and property: Some general issues", En: R. Hirschon (ed.) *Women and Property - Women as Property*, Londres: Croom Helm.

WOLF, D.L., 1992. *Factory Daughters: Gender, Household Dynamics and Rural Industrialization in Java*. Berkeley: University of California Press.